VOTO CONCURRENTENTE QUE EMITE EL MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK EN EL AMPARO EN REVISIÓN 1005/2018

En sesión de veinte de marzo de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el asunto citado al rubro y confirmó que el bloqueo realizado por el Fiscal General de Veracruz a un periodista en la red social Twitter: **a)** era un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y **b)** era violatorio del derecho de la libertad de expresión e información del periodista. Por tal razón, se ordenó al funcionario desbloquear al periodista. Aunque comparto la decisión de la Sala, me aparto de algunas de las razones que la sustentan.

I. Sobre el bloqueo de una red social como acto de autoridad

La Sala consideró que el bloqueo impugnado era un acto de autoridad esencialmente porque: **a)** existe una obligación de la Fiscalía de difundir información de interés público, en términos de la Ley de Transparencia local; **b)** dicha obligación tiene su origen en una norma, lo que implica una relación de supra a subordinación, y **c)** aunque no existe una norma que específicamente obligue a la Fiscalía a difundir información en la plataforma Twitter, el fiscal decidió comunicar sus actividades en esa plataforma, por lo que *“tiene que asumir las consecuencias normativas”* de sus actos.

No comparto tales razonamientos porque me parece incorrecto derivar y asignar obligaciones puntuales para un funcionario en lo particular (titular de la Fiscalía), a partir de las que genéricamente le corresponden al órgano al que pertenece (Fiscalía). A mi juicio, la conclusión pasa por alto que la Fiscalía se compone de múltiples y diferenciados órganos o unidades administrativas con obligaciones puntuales e igualmente diferenciadas, conforme a las leyes y reglamentos aplicables. Soslayar tal diferenciación, por más que se trate del titular del órgano, no sólo genera incertidumbre jurídica para los operadores (funcionarios y los particulares), sino que pasa por alto uno de los principios centrales de todo estado de derecho: las

VOTO CONCURRENTENTE EN EL AMPARO EN REVISIÓN 1005/2018

autoridades sólo pueden realizar las acciones que expresamente les están conferidas.

A mi parecer, este caso ameritaba hacer un análisis distinto del acto de autoridad. Se requería una metodología que nos permitiera analizar este tipo de casos en donde las relaciones entre los particulares y los funcionarios públicos adquieren formas atípicas, como es el caso de su interacción en redes sociales, en que las personas que ocupan cargos públicos tienen o pueden tener una doble faceta, privada y pública. En este sentido, considero que para determinar si el acto en concreto es acto de autoridad debe tenerse en cuenta: 1) que la persona en cuestión ocupa una función pública, y 2) que hace uso de esos espacios llamados “redes sociales” para comunicar información relacionada con su encargo –lo que resulta de interés público– y para interactuar con la ciudadanía.

Me parece esencial que en estos casos la Suprema Corte cambie su aproximación “tradicional” para definir qué es un acto de autoridad y se analice el acto no a partir de la existencia de una conducta prevista en una norma, sino en función de la afectación a un derecho con ciertas particularidades, como en este caso, el derecho a la información. En este sentido, un servidor público no puede alegar estar actuando en su esfera privada cuando parte de la información que publica es información de las actividades que realiza como consecuencia de su encargo público. Y tampoco puede analizarse el acto reclamado (el bloqueo de la cuenta al particular) como si se le estuviera impidiendo la entrada a un “espacio privado” puesto que la información que se difunde y la interacción que se da en ese espacio, se asemeja más a un espacio de carácter público en donde no pueden ser censuradas opiniones o personas. Es decir, podemos afirmar que estamos frente a un acto de autoridad cuando éste se da en el contexto de una potestad pública y tiene repercusiones en la esfera pública.

2. Sobre la vulneración al derecho a la información y la libertad de expresión en el caso concreto

En segundo lugar, me gustaría precisar mis razones para sostener porqué considero que sí se vulnero el derecho a la información en este caso.

La jurisprudencia de este Alto Tribunal es clara en cuanto a que la libertad de expresión y el derecho a la información tienen una especial relevancia para una sociedad democrática, no sólo por lo que representan para el individuo en específico que se expresa o que recibe información, sino para la colectividad en tanto permite confrontar ideas y robustecer el debate.

Aunque comparto algunas de las consideraciones de la sentencia en cuanto a que el bloqueo de la cuenta del quejoso incidió en su derecho a recibir dicha información, a mi parecer en este caso cobra más relevancia el derecho en su vertiente de **deliberación**.

El bloqueo de la red social Twitter no impide que de forma absoluta el periodista tenga acceso a la cuenta del fiscal. Le bastaría con “cerrar su sesión en twitter” y acceder al perfil del fiscal mediante un buscador o una cuenta alterna, para acceder a lo que éste publica. Lo que el bloqueo en realidad impide es la “interacción” entre las cuentas del periodista y el funcionario público. Es decir, lo que se impide es el contraste de ideas e información que pueda ser conocido por los usuarios de esa red.

A diferencia de un medio de comunicación tradicional en donde usualmente existe una única vía de emisión, las redes sociales permiten un diálogo que enriquece el debate, la confrontación de ideas y opiniones. Las redes sociales generan un foro virtual de deliberación que tiene relevancia más allá de los datos, opiniones o información objetiva que se emita de manera inicial por el usuario.

Además, en el caso específico, tal deliberación es aún más relevante por los sujetos involucrados (un funcionario público y un periodista) y el

**VOTO CONCURRENTENTE EN EL
AMPARO EN REVISIÓN 1005/2018**

contenido de la información difundida. Ello hace que el posible debate que se puede dar en la vía de comentarios entre diversos usuarios cobre relevancia, no sólo para las partes involucradas sino para la sociedad en general.

A mi parecer, la resolución debió cubrir estas cuestiones, puesto que no estamos ante un caso relacionado con un medio de comunicación tradicional, y a partir de ello guiar el comportamiento de los usuarios de redes sociales a futuro, especialmente de aquellos que deciden hacer uso de sus redes sociales para cuestiones públicas.

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

OH/PXMA/VD